

Ciudad de México a 28 de marzo de 2025
CEAVICDMX/246/2025

LIC. EDGAR ALEJANDRO GÓMEZ JAIMES
COORDINADOR DEL REGISTRO DE VÍCTIMAS
PRESENTE.

En autos del JUICIO DE AMPARO 1242/2024, promovido JOSÉ DAVID GONZÁLEZ CAMACHO, ante el juzgado DÉCIMO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO y en atención al OFICIO: 10531/2025 signado por la Secretaría del Juzgado, y recepcionado en esta Comisión el 28 de marzo de este año, se le solicita atender lo acordado por el Juzgado de Distrito, marcando copia del cumplimiento a esta oficina.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración lo anterior es necesario contestar en un plazo razonable.

En ese sentido, atienda en los términos procesales de las leyes de la materia, de manera general, al margen de prever la variada gama de casos que son atendidos por esta Comisión Ejecutiva cuasi-jurisdiccional, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que se conocen.


Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro "TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.


Por ello, esta Comisión, garante comprometida con la tutela de los derechos humanos confiados, requiere cumplir en los términos requeridos o bien manifieste la imposibilidad en caso de existir exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, fundamentando el carácter excepcional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Lic. Ernesto Alvarado Ruiz
Comisionado Ejecutivo de Atención a
Víctimas de la Ciudad de México.

Elaboró: RRE 

Revisó: CVFC 





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

"2025, AÑO DE LA MUJER INDÍGENA."

10531/2025 COORDINADORA DEL REGISTRO DE VÍCTIMAS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)

10532/2025 COMITÉ INTERDISCIPLINARIO EVALUADOR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)

EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 1242/2024, PROMOVIDO POR JOSÉ DAVID GONZÁLEZ CAMACHO, SE DICTÓ UN PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE:

VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1242/2024, promovido por José David González Camacho¹, contra actos de la Coordinadora del Registro de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, por considerarse violatorios de diversos derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito presentado físicamente el dieciocho de junio de dos mil veinticuatro, José David González Camacho solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y por los actos reclamados que a continuación se precisan:

(...)

2. Autoridad responsable:

Coordinadora del Registro de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.

3. Omisión reclamada:

La omisión de resolver en definitiva mi solicitud de ingreso al Registro de Víctimas de la Ciudad de México formulada mediante escrito presentado el pasado doce de enero de dos mil veinticuatro.

(...)" (Sic)

SEGUNDO. Por auto de veintiuno de junio de dos mil veinticuatro, se recibió la demanda de amparo que se registró con el consecutivo 1242/2024; se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable el informe con justificación, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público Federal adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional.

TERCERO. Por acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, derivado de la información remitida en el informe justificado rendido por la autoridad originalmente señalada como responsable, así como de las constancias que se recabaron de manera oficiosa por parte de este órgano jurisdiccional, se conoció que al Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México es a la autoridad a la que le compete el realizar y/o elaborar el dictamen en el que se determine el ingreso o negativa al registro de atención a víctimas relativo, cuya solicitud en resolver reprocha el quejoso en esta vía.

Por lo que se le requirió al promovente a efecto de que manifestara si a su interés legal convenía el señalar a dicha autoridad como responsable de la omisión reclamada, con el apercibimiento que en caso de no atender el requerimiento de ampliación de autoridad mencionado,

¹ Dato correspondiente al nombre de la persona moral quejosa.



sin necesidad de acuerdo ulterior, se le dena por oído su derecho a hacerla, continuándose con el trámite del juicio en que se actúa, ajustándose a la lita establecida en el cuestionario de demanda.

Cuestión que se tuvo por desahogada mediante acuerdo de diez de febrero de dos mil veinticinco, por lo que se admitió a trámite la ampliación de demanda en razón por lo que hace el Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México de que se reclamó la omisión de ella en el dictamen en el que se determinó el ingreso o negativa al registro de víctimas correspondiente por lo que hace al acto quejoso, requiriéndole el informe justificado de ley, además de hacer de su conocimiento la hora y fecha programadas para el verificación de la atención constitucional.

CUARTO. Una vez agotada la secuencia procedimental del juicio en que se actúa, previo diferimiento, se continuó con el trámite del juicio al tenor de los actos y autoridades originalmente señalados, verificándose la audiencia constitucional en términos del acto que antecede y.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Juzgado Decimoprimer de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es competente para conocer de este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 6, 36, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, en términos del Acuerdo General 2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número y la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se promueve contra un acto omiso atribuido a autoridades de naturaleza administrativa con domicilio en el lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal.

SEGUNDO. Previamente al análisis de certeza o inexistencia de los actos que motiva la parte quejosa, es conveniente preclarar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia P.J. 4062001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 37, cuyo rubro es, "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."

Del contenido integral de la demanda de amparo, recurso de ampliación y de la información que se encuentra en las constancias que integran el expediente en que se actúa, se precisa que los actos que reclama la quejosa en esta vía consisten en:

- * Omisión de resolver la solicitud del quejoso de ingreso al registro de víctimas de la Ciudad de México que presentó el doce de enero de dos mil veinticuatro en la Oficina de Partes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.

Precisado el acto reclamado, la procedente es verificar su existencia a fin de que, posteriormente, se analicen las causas de improcedencia del juicio de amparo y, en dado caso, la constitucionalidad de éste.

TERCERO. En cierto el acto reclamado a la Coordinación del Registro de Víctimas y al Comité Interdisciplinario Evaluador, ambos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (dentro de su ámbito de competencia respectivos), consistente en la omisión de resolver la solicitud del quejoso para el ingreso al registro de víctimas de la Ciudad de México que presentó desde el doce de enero de dos mil veinticuatro en la Oficina de Partes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México; no obstante lo reportado al rendir informe justificado.

Se dice lo anterior, puesto que en la data de la presentación de la demanda, a saber dieciocho de junio de dos mil veinticuatro, las autoridades responsables aludidas todavía no se pronuncian al respecto, esto es, aún no se dictaminó sobre el ingreso o negativa al registro de víctimas de dicha Comisión de conformidad con la Ley de Víctimas para la Ciudad de México y su Reglamento.

Siendo que el expediente administrativo CFAV/IN/24/582704, formado con motivo de la solicitud del quejoso de ingreso al registro de víctimas de la Ciudad de México, fue remitido hasta el siete de noviembre de dos mil veinticuatro a la Coordinación del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México al haberse llevado a cabo la integración y conclusión del expediente aludido con los elementos necesarios para que éste emita la opinión técnica correspondiente, acorde con el Reglamento de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, la cual, atendido con prioridad a la presunción de la demanda.

Se que tampoco obsta, que en el caso, el Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México haya alegado que con motivo del oficio CENAGOV/SECRETARÍA/1560115¹ de siete de febrero de dos mil veinticinco, le informó al Coordinador del Registro de Víctimas de la Ciudad de México que ya existe un reconocimiento expreso por parte del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Juicio de Amparo Indirecto 406201², en el que se le da la calidad de víctima indirecta al

¹ Dato relativo al allanamiento de casa del 24 de mayo.

² Dato de fecha del al número de juicio de amparo en trámite.



quejoso, puesto que éste fue emitido con posterioridad a la promoción del juicio en que se actúa como ya se expuso con antelación.

La existencia de la omisión reclamada se corrobora con las constancias que obran en el juicio, a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

CUARTO. El estudio de las causas de improcedencia, de oficio o a petición de parte, es una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo.

El Coordinador del Registro de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México al rendir informe justificado adujo que respecto de la omisión que se le reclama se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos de los actos reclamados.

El precepto y fracción establecen:

"Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:

...

XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado"

El artículo transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado cesó en sus efectos.

La interpretación teleológica de este precepto permite establecer que para su actualización es imprescindible que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo, o bien, cuando realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativa, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravia al quejoso.

Esta interpretación atiende a que el juicio no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, puesto que el objetivo de la protección constitucional consiste en restituir al peticionario en el pleno goce y respeto del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, así se estipula en el artículo 77 de la ley en consulta.

A efecto de establecer si en el particular se actualiza la hipótesis invocada es necesario partir de la naturaleza del acto reclamado, para luego establecer si la pretensión del quejoso está satisfecha con los actos desplegados por la responsable.

Lo cual, en el caso no se configura, puesto que como ya se dijo en la parte considerativa relativa a la existencia de los actos reclamados, éstos son de naturaleza negativa –omisiones-. Por lo que, si en la data de la presentación de la demanda que da origen a este juicio, así como en la fecha de dictado de esta sentencia, la solicitud del quejoso todavía no ha sido resuelta, no le asiste razón a la autoridad responsable en su proposición.

En el mismo sentido, no se actualiza la misma causal de improcedencia hecha valer por parte del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, en la que asegura que cesaron los actos reclamados en razón de que emitió el oficio CEAVICDMX/DFVCDMX/CIE/139/2025 de siete de febrero de dos mil veinticinco, mediante el cual le informó al Coordinador del Registro de Víctimas de la Ciudad de México que ya existía un reconocimiento previo y expreso por parte del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Juicio de Amparo Indirecto 835/2021, en el que se le da la calidad de víctima indirecta al quejoso.

Toda vez que el acto aquí reclamado es la omisión de resolver la solicitud del quejoso de ingreso al registro de víctimas de la Ciudad de México que presentó el doce de enero de dos mil veinticuatro en la Oficialía de Partes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, por parte de las autoridades pertenecientes a dicha Comisión, ni así por lo que hace al Juzgado Penal, puesto que lo que busca el promovente es acceder a los mecanismos de reparación integral previstos en la Ley de Víctimas de la Ciudad de México.

Al no existir causal de improcedencia pendiente de analizar que hayan hecho valer por las partes, ni que de oficio se advierta la actualización de alguna que deba ser estudiada, se procede al estudio de fondo de la cuestión planteada.

QUINTO. La parte quejosa reclama en este juicio la omisión de resolver su solicitud de ingreso al registro de víctimas de la Ciudad de México, la cual, presentó el doce de enero de dos mil veinticuatro en la Oficialía de Partes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, al considerar que existe una violación simultánea de derechos fundamentales ante la falta de respuesta que implica que se le imparta justicia en los términos y plazos que fijan las leyes, además de colocarse en estado de indefensión e incertidumbre jurídica al no conocer su situación jurídica en cuanto a lo solicitado.

Derechos que se encuentran consagrados en los numerales 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por consiguiente, con fundamento en el artículo 26¹ de la Ley de Amparo, la solución alegada será analizada al tenor del artículo 17² de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido es:

"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para ordenar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su función será gratuita, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

(...)"

El precepto constitucional transcrito contiene el derecho de acceso a la impartición de justicia, consagrando en favor de los gobernados los siguientes principios:

1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes;

2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que comienza del hecho, emite pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos del litigio, cuyo estudio es necesario; y garantiza al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le presta o no la razón sobre los derechos que le garantizan la tutela jurisdiccional que ha solicitado;

3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador dicte una resolución, no sólo ajena a derecho, sino que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y

4. Justicia gratuita, que implica un que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto, emitiendo alguna por la prestación de ese servicio público.

Así, el derecho tutelado por el artículo en estudio tiene como finalidad asegurar al gobernado que la autoridad encargada de aplicarlo lo haga de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por lo que es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que le integran son todas aquellas que emitan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho.

Seve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son:

Suprema Corte
Intelecto Pleno
Excmo. Secretario Judicial de la Federación y su Circuito
Tomo XIV, Septiembre de 2011
Materias: Constitucional
Tesis: 72/112200
Página: 5

"JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUELLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL, UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia; derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte, dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez concluida, les proporcione respuestas precisas, para obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas. Y si bien en ese precepto se delega la voluntad del legislador establecer los plazos y términos uniformes a los cuales se someterá la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva no sólo limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia coadyuven al mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acuden para dirimir cualquiera de los conflictos que surgen de las relaciones jurídicas que existen, aunque y cuando las controversias o presupuestos procesales que se establezcan enmarquen sujeta en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República, por ende, para determinar si en un caso concreto la regulación presupuestal procesal establecida por el legislador estatal se apega a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la función judicial de la que derivan las controversias cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da."

Por otro lado, dicha prerrogativa constitucional, en atención al principio de progresividad de los derechos humanos, establecido en el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Federal, aplica no sólo a aquellas autoridades formal o materialmente jurisdiccionales en cuanto al acceso efectivo a la solución de controversias, sino que debe extenderse a los mecanismos administrativos de

¹ "Artículo 26. El amparo judicial, deberá cubrir los casos de violación o omisión que sufran los individuos de los preceptos constitucionales y leyes que se encuentren violados, y podrá también cubrir cualquier concepto de violación y no agotada, así como los demás supuestos de los preceptos, a fin de mantener la función efectivamente planteada, excluyendo los hechos expresos en la ley o en la ley."



tutela no jurisdiccional que tengan por objeto atender una solicitud, aun cuando ésta no involucre una controversia entre partes.

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República:

Época: Décima Época
Registro: 2006958
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 17, Abril de 2016, Tomo II
Materia(s): Constitucional
Tesis: I.1o.A.E.48 A (10a.)
Página: 1635

"ACCESO A LA JUSTICIA. LA PROTECCIÓN DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL DEBE EXTENDERSE A LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE TUTELA NO JURISDICCIONAL QUE TENGAN POR OBJETO ATENDER UNA SOLICITUD, AUN CUANDO ÉSTA NO INVOLUCRE UNA CONTROVERSIAS ENTRE PARTES. En los sistemas jurídicos tradicionales el concepto "justicia" se ha asimilado al conjunto de instituciones, procedimientos y operadores que intervienen en la dinámica de la resolución de desacuerdos legales dentro del aparato jurídico formal. De acuerdo con esta concepción formalista, las únicas autoridades que se encontrarían obligadas a la observancia del derecho fundamental de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos serían las que realizan funciones materialmente jurisdiccionales. No obstante, esta visión restringe la aplicación del principio de progresividad de los derechos humanos establecido en el artículo 1o., párrafo tercero, de la propia Norma Suprema, pues el acceso efectivo a la solución de desacuerdos constituye un derecho dúctil que tiende a garantizar la concreción de las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas que posibiliten el reconocimiento y el ejercicio efectivo de derechos de los gobernados dentro de las organizaciones jurídicas formales o alternativas. Por tanto, en congruencia con el principio aludido, la protección del derecho fundamental citado debe extenderse a los mecanismos administrativos de tutela no jurisdiccional que tengan por objeto atender una solicitud, aun cuando ésta no involucre una controversia entre partes."

En este contexto, resulta inconcuso que en el numeral 17 constitucional se garantiza en favor de los gobernados, entre otros derechos, el de acceso efectivo a la justicia, que se concreta en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso en el cual se cumplan los plazos y términos que fijan las leyes para tal efecto, pues como deriva del propio texto constitucional, no se trata de un derecho incondicionado y absoluto a la prestación de esa actividad, por lo que el mismo no puede ejercerse al margen de los cauces establecidos por el legislador.

Al respecto, cabe mencionar que por lo que hace a la omisión de resolver el expediente administrativo CEAVICIE/099/2024, se desprenden los antecedentes siguientes:

5. El doce de enero de dos mil veinticuatro, el quejoso solicitó su ingreso al registro de víctimas de la Ciudad de México en su calidad de víctima indirecta de José González Aguirre¹⁵, quien en vida fue su padre.
6. La solicitud del quejoso se remitió a la Coordinación del Registro de Víctimas de la Ciudad de México, mediante oficio CEAVICDMX/DUA/PC/467/2024¹⁶ de doce de abril de dos mil veinticuatro, suscrito por el Director de la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto del Registro aludido.
7. El siete de noviembre de dos mil veinticuatro, a través de oficio CEAVICDMX/DFV/RELOV/389/2024¹⁷ de cinco de noviembre de dos mil veinticuatro, se remitió el expediente administrativo CEAVICIE/099/2024, formado con motivo de la solicitud del quejoso de ingreso al registro de víctimas de la Ciudad de México, a la Coordinación del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México al haberse llevado a cabo la integración y conclusión del expediente aludido con los elementos necesarios para que éste última emita la opinión técnica correspondiente.
8. El siete de febrero de dos mil veinticinco, mediante el oficio CEAVICDMX/DFVCDMX/CIE/139/2025, la Coordinadora del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México le informó al Coordinador del Registro de Atención a Víctimas de ésta, que dado que al aquí quejoso ya le había sido reconocida la calidad de víctima indirecta por parte de un Juez Federal, ésta no se encontraba en el supuesto de la fracción V del artículo 4 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, sino en el de la fracción III, por lo que en efecto devolvió la devolvía el expediente administrativo CEAVICIE/099/2024, para que en el ámbito de sus facultades procediera a dar cumplimiento a lo establecido por la autoridad jurisdiccional.

¹⁵ Dato relativo al nombre de la persona física aludida.

¹⁶ Dato correspondiente al oficio de control del oficio en cuestión.

¹⁷ Dato correspondiente al oficio de control del oficio en cuestión.



En la fecha actual, aún se encuentra pendiente de resolución y/o de dictaminar el expediente administrativo C/AV/011/03/2021, en que existe determinación que lo haya resuelto y/o de por concluido.

En relación con lo anterior, no debe estar en cuenta que del Reglamento de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, que resulta aplicable al caso, en sus artículos 23 y 25 prevén lo conducente a la temporalidad para dictaminar sobre el ingreso de un solicitante al Registro de Víctimas de la Ciudad de México, en la forma siguiente:

"Artículo 23. Para el ingreso al Registro de Víctimas, la Comisión Ejecutiva remitirá al Comité Interdisciplinario Evaluador la solicitud a efecto de emitir y valorar la procedencia de admitirla mediante la opinión técnica, dictámenes y conclusiones que en su caso emita.

Artículo 25. La solicitud de ingreso al Registro que cumpla con los requisitos que establezca la Ley será atendida por el personal adscrito a este fin y en aquellos casos que lo amerite se considerará la resolución que emita el Comité Interdisciplinario para determinar el ingreso al Registro. La respuesta a la solicitud deberá ser emitida en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud y se encontrará debidamente integrada y completa el expediente para valorarla."

De los artículos referenciados por amparo se desprende que se envió al Comité Interdisciplinario Evaluador la solicitud de ingreso al Registro de Víctimas de la Ciudad de México con la finalidad de que éste lleva a cabo el análisis, así como la valoración, además de la pronunciación de la admisibilidad de la persona solicitante mediante la opinión técnica, dictámenes y conclusiones que en su caso emita, para lo cual, contó con un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud y se encuentra debidamente integrado y completo el expediente para valoración.

En el caso, el siete de noviembre de dos mil veinticuatro, fue recibido por parte del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México el expediente administrativo C/AV/011/03/2021, para que emita la opinión técnica respectiva, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México y, previamente, este se lo remitió al Coordinador del Registro de Víctimas de la Ciudad de México, informándole que la calidad de víctima indirecta ya lo había sido reconocido al causante por parte de una autoridad judicial federal.

Razón por la cual, tenía que actuarse en el marco de lo contemplado en el numeral 22 del Reglamento de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, que a saber, establece lo siguiente:

"Artículo 22. En el caso de que la solicitud de ingreso al Registro contenga el reconocimiento de las autoridades señaladas en el artículo 4, fracción I, II, III y IV de la Ley, recibida la solicitud respectiva, el Registro procederá a la inscripción respectiva, siempre que se haya cumplido formal y cualitativamente con la información recogida en el Formulario Único y de la documentación que acompaña y respalda dicho formulario, tratándose de delitos de alto impacto social y/o de violaciones graves y trascendentes en derechos humanos, a que se refiere el siguiente artículo.

En cualquier caso, el Registro podrá solicitar a las autoridades judiciales información complementaria a fin de satisfacer los requisitos señalados en los artículos 99 de la Ley General, así como el Formulario Único y documentación respectivas respecto al Formulario Único de Declaración, las que deberán suministrarse en un plazo de noventa días hábiles, en términos del numeral 145 de la Ley.

Tratándose de trámites procedentes de las autoridades señaladas en la fracción I del artículo 4 de la Ley y de víctimas directas, a fin de satisfacer los requisitos señalados en los artículos 99 de la Ley General, el Registro podrá solicitar la información o documentación que considere necesaria a cualquiera de las autoridades de la Ciudad de México o a la Comisión, las que deberán en el deber de suministrarla en un plazo que no exceda de noventa días hábiles, en términos del numeral 145 de la Ley, en atención con el derecho 71 y 77 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Una vez que se encuentren satisfechos los requisitos de forma y fondo, en los casos que implique valoración judicial, en términos del artículo 3 y 23 del presente Reglamento, en relación con el artículo 4, fracción V de la Ley, el Comité Interdisciplinario podrá remisión del expediente por el Registro, en el caso, emitirá un dictamen de ingreso favorable, en un plazo que no excederá de treinta días hábiles, pasado que remita al Registro conjuntamente con el expediente, a fin de que proceda a la inscripción en el Registro de Víctimas.

En caso contrario, o bien, tratándose de delitos que no se consideren de alto impacto social o violaciones graves y trascendentes en derechos humanos, el Comité Interdisciplinario emitirá un dictamen de negativa, debidamente fundamentado y motivado, mismo que será remitido al Registro para la emisión del acuerdo de negativa de inscripción al Registro y que notificado a la persona o entidad respectiva, en un plazo no mayor a diez días hábiles."



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 02

Juicio de amparo 1242/2024

Sin que en la fecha de la omisión de esta sentencia, se cuente aún con una resolución que dirima material y expresamente si el promovente ingresa o no al mulicilado registro de víctimas de la Ciudad de México, a pesar de haber transcurrido en exceso los treinta días a que hace referencia el precepto reglamentario en cita, inclusive, se cuenta con el hecho de que el propio Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México expuso que el quejoso ya tiene reconocida la calidad de víctima indirecta por parte de una Juez Federal, empero aún no existe un pronunciamiento jurídico formal de su entrada al registro de víctimas de la Comisión aludida.

Por consiguiente, es inconcuso que el concepto de violación formulado por la promovente es fundado.

Lo anterior, al haber transcurrido en demasía el plazo para que las autoridades responsables de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México emitiera el dictamen relativo a la solicitud del justiciable para acceder al registro de víctimas de la Ciudad de México, ello con motivo del expediente administrativo CEAVI/CIE/000/2024, que se formó con la solicitud del quejoso, ya que la responsable ha omitido resolver respecto de su procedencia, por lo que se viola el derecho fundamental de tutela jurisdiccional contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal.

En consecuencia, lo que procede es conceder al quejoso José David González Camacho, el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra el acto reclamado consistente en la omisión de resolver la solicitud del quejoso de ingreso al registro de víctimas de la Ciudad de México que presentó el doce de enero de dos mil veinticuatro en la Oficina de Partes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.

Lo anterior, para el efecto de que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables pertenecientes a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México con libertad de jurisdicción, atendiendo al procedimiento correspondiente, así como dejando de lado cualquier impedimento y/o obstáculo burocrático, agoten dicho procedimiento y resuelvan de inmediato respecto del ingreso del quejoso al Registro de Víctimas de la Ciudad de México, esto es, su registro formal conforme a la Ley de Víctimas para la Ciudad de México y su Reglamento.

Lo cual, deberán notificar de manera personal a la quejosa, acreditando ante éste Juzgado Federal con las constancias correspondientes el cumplimiento de mérito.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, 82, 63, 73, 74, 75, 76, 77, 124, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se,

RESUELVE:

ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a José David González Camacho, contra el acto señalado en el considerando segundo, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia.

Notifíquese.

Así lo resolvió y firma Mariza Arellano Pompa, Secretaria en funciones de Jueza del Juzgado Decimoprimer de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, designada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el día veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro y comunicada en oficio SEADS/776/2025, del siete de marzo de dos mil veinticinco, asistida por el Secretario Stefan Arrazola Chávez, que autoriza y da fe. Doy fe.

CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL VENTICINCO.

STEFAN ARRAZOLA CHÁVEZ

SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMOPRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

